

**SACRAMENTAL DE SAN ISIDRO**

---

**PROYECTO DE CONTESTACION**

AL ESCRITO PRESENTADO

POR

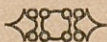
**D. ALBERTO DE ALCOCER**

ANTE LA

**DIRECCION GENERAL DE SANIDAD**

SOBRE CLAUSURA DEL

**Cementerio de esta Sacramental**



MADRID

Tipografia Mora-Zaballos

Carrera de San Francisco, 9

1924





**SACRAMENTAL DE SAN ISIDRO**

---

**PROYECTO DE CONTESTACION**

AL ESCRITO PRESENTADO

POR

**D. ALBERTO DE ALCOCER**

ANTE LA

**DIRECCION GENERAL DE SANIDAD**

SOBRE CLAUSURA DEL

**Cementerio de esta Sacramental**



MADRID

Tipografia Mora-Zaballos

Carrera de San Francisco, 9

1924



R/115272  
Ayuntamiento de Madrid



ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD:

Don Ruperto de Besga y Zamora, mayor de edad, vecino de esta capital, domiciliado en la calle de Miguel Angel, núm. 11, hotel, en concepto de Presidente de la Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, de esta Corte, cuya representación acredito con la certificación que acompaño, expedida por el Sr. Secretario de la expresada Corporación, a V. I. expongo: Que con fecha 26 del pasado mes de Noviembre se me ha notificado la resolución de esa Dirección general para que se me ponga de manifiesto el expediente que en la misma se instruye con motivo de una instancia, fechada en 14 de Febrero último, suscrita por el Sr. D. Alberto de Alcocer, a la sazón Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, en solicitud de que se proceda a decretar la clausura de los cementerios pertenecientes a las Archicofradías Sacramentales de San Lorenzo, Santa María, San Justo y San Isidro, para que en el término de 30 días expongan lo que estimaren pertinente a su derecho.

Procuraremos tratar este importante y trascendental asunto, por lo que a la Sacramental de San Isidro se re-

fiere, con la concisión posible para no fatigar la atención de V. I.; pero es de tal magnitud, afecta tan profunda e intensamente a numerosas familias, cuyos sagrados intereses e incuestionables derechos se trata, por lo visto, de conculcar, que, muy a pesar nuestro, habremos de extendernos en ciertas consideraciones legales pertinentes a este grave asunto, para llevar al ánimo de V. I. la convicción del respetable y manifiesto derecho que nos asiste para oponernos con toda energía a la expresada solicitud del Sr. Alcalde de Madrid.

Entendemos que el mejor método a seguir para demostrar cumplidamente la improcedencia de clausurar el cementerio de San Isidro, privando a los Mayordomos de esta Sacramental de sus derechos, con arreglo a las disposiciones vigentes, es ocuparnos ante todo del examen de los textos y disposiciones legales que invoca en su escrito el Sr. Alcocer para pedir la clausura de nuestro Cemeterio.

Cita al efecto como fundamento para ello las Reales órdenes de 15 de Enero de 1877, 7 de Agosto de 1884 y 16 de Mayo de 1885, apoyándose, además, en el hecho de tener construída la Necrópolis, a que esas disposiciones obligaban al Ayuntamiento de Madrid. Veamos lo que dicen esas Reales órdenes: la de 15 de Enero de 1877, que puede considerarse como base y punto de partida que sirvió para dictar las siguientes, dispone que en los cementerios de San Nicolás y de San Sebastián no se verifiquen más enterramientos que los de las familias de los actuales cofrades, y que proceda el Ayuntamiento a la creación de una Necrópolis.

El fundamento de esta Soberana disposición se des-



arrolla en el segundo Considerando de la misma, «por  
»las circunstancias especiales de insalubridad, dice, que  
»reúnen los cementerios de esta Corte, dada la elevación  
»de sus tapias, la aglomeración de cadáveres en una mis-  
»ma fosa, la corta distancia de éstas entre sí, el excesivo  
»número de nichos que contienen, la mala ventilación de  
»sus galerías, la calidad poco a propósito de su suelo y  
»otras circunstancias contrarias a las reglas de higiene  
»pública». Esta R. O. hace extensiva la clausura de ce-  
menterios a todos los demás de esta capital, *situados  
dentro de poblado.*

La R. O. de 7 de Agosto de 1884, dispone la clau-  
sura de los cementerios de San Martín, San Luis, Pa-  
triarcal, General del Norte y del Sur y Provincial, por  
las mismas razones consignadas en la Real orden an-  
terior y por hallarse circundados por edificaciones habi-  
tadas, o encontrarse algunos de ellos en lamentable es-  
tado de abandono; a estas circunstancias se añadía el  
temor que entonces existía de una invasión epidémica  
por el lado de Francia; pero es digno de mención que  
en la misma Real orden se consigna que deben conser-  
varse los cementerios de San Isidro, San Justo, San Lo-  
renzo y Santa María, que se hallan, dice, fuera de la  
zona de ensanche *y en condiciones higiénicas para la  
población.*

La R. O. de 16 de Mayo de 1885, disiente de lo es-  
tablecido en la anterior respecto a las condiciones higié-  
nicas de los cementerios de las cuatro expresadas Sa-  
cramentales, y añade: que si bien deben respetarse los  
derechos adquiridos por los actuales cofrades, no debe  
permitirse la admisión de otros nuevos, puesto que una



»vez abierto el Cementerio del Este no existe razón, dice, para que deje de llevarse a efecto lo prevenido »en la expresada R. O. (de 15 de Enero de 1877).»

Es evidente que ninguna de las tres precitadas Reales órdenes es aplicable al cementerio de San Isidro, que reúne, como dice la R. O. de 7 de Agosto de 1884, *condiciones higiénicas*. Y tanto las reúne, añadimos nosotros, que no hay paridad ni existe semejanza alguna entre las condiciones en que se encontraban los cementerios entonces clausurados y las que tiene nuestro cementerio, situado en la margen derecha del río Manzanares, en los extramuros de Madrid, sobre una eminencia de considerable altura sobre el nivel de dicho río, abierto a todos los vientos y perfectamente orientado al Sud-oeste de la capital, y las inhumaciones se verifican ateniéndose rigurosamente a las prescripciones sanitarias establecidas en la R. O. de 15 de Octubre de 1898, a cuyas disposiciones nos hemos atendido también para la construcción de las localidades de enterramiento.

En el cementerio de San Isidro no existe esa aglomeración de cadáveres en una misma sepultura a que se refiere la primera de las citadas Reales órdenes, puesto que por regla general sólo contienen dos o tres cadáveres cada una, excepto cuando se trata de párvulos o de traslados de cadáveres antiguos, en cuyos casos no hay ningún inconveniente en aumentar ese número prudencialmente; las sepulturas están debidamente separadas unas de otras por medio de las entrecalles que exige la disposición de 1898; las galerías de nichos están también suficientemente ventiladas, y éstos en las



condiciones de construcción prevenidas; en una palabra y rotundamente podemos afirmar, porque es notorio y puede fácilmente comprobarse, que el cementerio de esta Sacramental de San Isidro reúne las mejores condiciones de higiene y salubridad pública que pueden apetecerse.

No tenemos para qué llamar la ilustrada atención de V. I. sobre la contradicción, más aparente que real, que existe entre la R. O. de 7 de Agosto de 1884 y la de 16 de Mayo de 1885, al afirmar ésta en contraposición con aquélla, que los cementerios de las cuatro actuales Sacramentales no reunían condiciones sanitarias, se comprende fácilmente que ésta es solo una ligera equivocación, porque no es admisible que en el transcurso de sólo nueve meses que existe entre una y otra Real orden, desaparecieran las condiciones higiénicas de esos cementerios.

Carece, pues, de valor jurídico el invocar las disposiciones de las tres Reales órdenes antes citadas para fundamentar en ellas la petición de clausura de nuestro cementerio, toda vez que, como hemos demostrado, sus disposiciones se dictaron para otros cementerios que se hallaban en muy diferentes condiciones y circunstancias que el de San Isidro, al cual en modo alguno son aplicables.

Hemos visto que una de las circunstancias en que se apoya la R. O. de 15 de Enero de 1877 para decretar la clausura de los cementerios a que se refiere, es la de que éstos se hallan dentro de poblado, como en efecto era cierto respecto a la mayor parte de ellos, y esta circunstancia no concurre en el cementerio de San Isi-



dro, que, como hemos dicho y es notorio, se encuentra en la parte derecha del río, en un terreno abrupto y lleno de montículos, nada adecuado para la regular construcción de viviendas y para la urbanización. Cier-to que en sus proximidades se han construido algunas casas, como ocurre siempre en las cercanías de estos lugares, y como acontece ya en la nueva Necrópolis mu-nicipal; pero ni esas construcciones constituyen verda-deros núcleos de población urbana, ni aunque lo forma-ran con agrupaciones de importancia sería motivo de clausura de un cementerio mientras se observen, como en el de San Isidro, las reglas y prevenciones sanitarias dictadas al efecto; tal ocurre en muchas importantes ciudades del extranjero, como París, Londres, Bruse-las, etc., que tienen dentro de sus recintos magníficos cementerios, abiertos a las inhumaciones, y que en nada perjudican a la salud pública de aquellas capi-tales.

Y pasemos ahora a hacernos cargo de una afirma-ción que hace en su instancia el Sr. Alcocer, que nos causó penosa sorpresa cuando la leímos y que no se nos alcanza cómo ha podido ocurrírsele a un letrado de sus condiciones y suficiencia, nos referimos al argumento de que «los derechos que pudiéramos alegar en nues-tra defensa carecen de valor ante el interés colectivo social»; o, hemos leído mal, o no entendemos bien lo que ha querido decir con esto el Sr. Alcocer. ¿Es acaso que ante el interés general cede o debe desaparecer el interés particular? Si es esto, estamos completamente de acuerdo porque se trata de un axioma jurídico; pero, ciertamente, no tiene aplicación en modo alguno al



caso nuestro; el interés particular cede al interés general o al colectivo social ¡qué duda tiene!, cuando entre uno y otro existe incompatibilidad, cuando son antitéticas, cuando al ejercicio libre del uno se opone el otro o le embaraza y dificulta.

Pero aquí, Ilmo. Sr., no existe esa incompatibilidad ni oposición de intereses, porque el hecho de hacer uso de su perfecto y legítimo derecho los Mayordomos de esta Archicofradía y sus familias a ser inhumados en su día en su Cementerio de San Isidro, no empece ni se opone en lo más mínimo a que las demás personas, que no pertenecen a esta Archicofradía, se inhumen, cuando su hora sea llegada, en la nueva Necrópolis o en otro cementerio que pudiera corresponderles. Por más que reflexionamos sobre este asunto no vemos por ninguna parte la incompatibilidad entre el derecho sagrado e incuestionable de los Archicofrades y el no menos respetable de los que no lo sean, a ser inhumados, cuando les llegue el forzoso turno, en el cementerio que les corresponda, como antes decimos; no existe, pues, ese antagonismo entre el interés colectivo social y el interés particular de los Archicofrades de la Sacramental de San Isidro.

Colocado ya en esta pendiente de afirmaciones realmente gratuitas, el Sr. Alcocer supone en su escrito llegado el caso de que se decreta la clausura de nuestro cementerio, y en tal supuesto nos niega el derecho de exigir indemnización en caso semejante, citando al efecto, para corroborar su afirmación, la Sentencia del T. S. de 6 de Julio de 1889. Prescindiendo de lo intempestivo e improcedente de tratar este asunto en un escrito diri-



gido a esa Dirección general, que no tiene atribuciones ni es competente para conceder o negar indemnizaciones por causa de expropiación, nos limitaremos a consignar que la citada sentencia no es aplicable a nuestro caso, porque sabido es, y así lo tiene repetidamente declarado el mismo Tribunal Supremo, que la doctrina jurídica contenida en sus sentencias no puede invocarse válidamente sino en los casos idénticos o que tengan verdadera analogía, por su esencia y por sus circunstancias, con el de que se trate, y es claro y evidente que esa referida sentencia dictada en asunto distinto del que ahora nos ocupa y en circunstancias muy diferentes no procede invocarse para negarnos ese derecho de indemnización, como en aquel escrito se afirma; olvida dicho señor que nada menos que la Constitución de la Monarquía, en su artículo 10, establece y ordena que «nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.»

Permítanos V. I. insistir un poco más sobre esta cuestión, a pesar de su notoria improcedencia en este momento y lugar, pero no podemos dejar pasar en silencio otra gratuita y equivocada afirmación del Sr. Alcocer, basada en la antes citada sentencia, que establece que corresponde a las «facultades discrecionales del Gobierno la clausura de cementerios». Es cierto, y nos otros aceptamos ese principio y lo acatamos desde el momento en que aquel alto Tribunal así lo declara; pero repetimos nuevamente que la expresada sentencia no es aplicable de ningún modo al cementerio de San



Isidro que no se encuentra, afortunadamente, en las malas condiciones en que se encontraban los cementerios en aquella fecha clausurados, por constituir un serio peligro para la salud pública.

Las facultades discrecionales del Gobierno, en contraposición a las facultades regladas, tienen también su límite dentro de las prescripciones del derecho administrativo; no son absolutas, sino que están limitadas por los derechos que las leyes conceden, los cuales no se pueden atropellar, ni siquiera desconocer por la Administración; su esfera de acción queda limitada, como no puede menos de ser, a que prevalezca siempre el interés general cuando resulte incompatible con el privado. Perdón V. I. esta pequeña digresión, que hemos creído necesaria para contestar a las afirmaciones hechas en contrario, aunque no sea éste el lugar adecuado para ello, como antes hemos manifestado, y prematuro el tratar ahora de este extremo.

Y pasemos a ocuparnos del último argumento que esgrime el Sr. Alcocer para pedir la clausura de nuestro cementerio a saber la apertura de la Necrópolis municipal, afirmando rotundamente que una vez abierta ésta para el servicio inhumatorio de la población deben cesar en su funcionamiento los demás cementerios de esta capital, sin tener en cuenta, por lo visto, si están en condiciones legales para llenar satisfactoriamente su cometido, y prescindiendo en absoluto de los respetables derechos adquiridos por los dueños de esos cementerios, al amparo de las leyes.

Claro es que no puede sostenerse válidamente ni prevalecer semejante teoría, que no vacilamos en cali-



ficar de anárquica, desde el momento que sacrifica los derechos adquiridos y los respetables intereses creados a la sombra de las disposiciones legales vigentes, al simple hecho de haberse abierto un cementerio municipal, que hace tiempo debió haberse construido para las necesidades de la población madrileña, desde el momento que fueron clausurados los cementerios que llenaban ese cometido y que no estaban en condiciones de continuar abiertos.

Nosotros nos congratulamos de la apertura de la Necrópolis, como vecinos de Madrid; era una necesidad sentida e impuesta por las circunstancias desde la clausura de los cementerios a que hemos aludido, y así lo entendió el Gobierno, cuando al mismo tiempo que decretó la referida clausura impuso al Ayuntamiento la obligación de construir, no una, sino dos Necrópolis, situadas al Este y al Oeste de la capital (R. O. de 15 de Octubre de 1880), para atender debidamente al servicio inhumatorio de la creciente población de Madrid.

Pero esa obligación, que al fin ha podido cumplir en parte el Excmo. Ayuntamiento, construyendo y terminando la nueva Necrópolis, que hace algún tiempo viene cumpliendo sus fines, no significa la clausura del cementerio de San Isidro, ni debe influir en lo más mínimo en la existencia de nuestro cementerio, porque no hay ley ni disposición alguna que conceda al Ayuntamiento la municipalización del servicio inhumatorio de esta capital, creando al efecto un verdadero monopolio, ni que reconozca o conceda la exclusiva de ese servicio a la Corporación municipal.

Vamos a demostrar cumplidamente nuestro aserto y



la afirmación que consignada queda, del modo más breve que nos sea posible, a fin de no molestar mucho la atención de V. I.

Prescindimos de hacer la historia del cementerio de San Isidro; sólo dejaremos consignado que esta Archicofradía se rige en la actualidad por sus Ordenanzas del año 1790, reformadas por las de 1869, que fueron aprobadas y sancionadas por S. A. el Regente del Reino, con fecha 9 de Septiembre de dicho año, y el decreto, que realmente tiene los caracteres de una ley, fué refrendado por el entonces Ministro de Gracia y Justicia, D. Manuel Ruiz Zorrilla, y registrada en la Cancillería con el núm. 43.632, habiendo precedido a todo ello el informe y aprobación del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, en cuyas Ordenanzas se dispone cuanto atañe a esta Sacramental y a su cementerio, que desde mucho antes, desde principios del siglo xix, venía sirviendo de enterramiento a los Mayordomos que formaban esta Archicofradía. La admisión de estos Mayordomos o Archicofrades fué completamente libre, sin exigirles más requisitos para su entrada que el profesar la religión católica, apostólica, romana, puesto que la prohibición de admitir nuevos Mayordomos, contenidas en las Reales órdenes citadas, no se referían al cementerio de San Isidro; por consiguiente, nunca ha constituido privilegio de ninguna clase el pertenecer a nuestra Archicofradía, que tuvo abiertas sus puertas para todo el que quiso entrar en ella, sin más requisitos que el que dejamos apuntado.

Así continuaron las cosas hasta que, debido a gestiones de algunos alcaldes de aquella época, y siguiendo



el propósito ya formado de llegar a la extinción de estos cementerios particulares, se dictó la R. O. de 9 de Septiembre de 1891, que con la de 29 de Noviembre del mismo año, constituyen hoy el estado de derecho por el que se rigen los cementerios de las cuatro Sacramentales ya citadas.

La R. O. de 9 de Septiembre de 1891 dispuso, como es sabido, que se formara una lista de todos los Mayordomos que pertenecían a estas Archicofradías, número de panteones construídos o en construcción y personas a quienes alcanza el derecho de ser inhumados; todos estos requisitos fueron cumplimentados por la Sacramental de San Isidro, enviándose a las oficinas municipales la expresada lista con todos sus datos.

Pero no obstante la claridad de redacción de esta R. O., quiso el Ayuntamiento limitar los enterramientos únicamente en favor de las personas que aparecían inscritos en la citada lista, y entonces se dictó la Real orden de 29 de Noviembre, a que antes nos hemos referido, en la que se declara *«en contra de lo interpretado por el Alcalde de Madrid, que la R. O. de 9 de Septiembre último concede derecho a enterramiento en las Sacramentales de San Isidro, San Justo, Santa María y San Lorenzo, a todos los que como Mayordomos o cofrades aparecen inscritos hasta el 11 de Septiembre último inclusive, así como a todos los parientes de los mismos a quienes se extienda el derecho, según los respectivos reglamentos o estatutos»*; esto dice textualmente la precitada R. O.

En virtud de estas soberanas disposiciones, y bajo su amparo y salvaguardia, se vienen haciendo desde en-



tonces las inhumaciones de cadáveres en el cementerio de San Isidro, enterrando en él a nuestros Mayordomos comprendidos en aquella lista y a sus parientes que a ello tienen derecho, según nuestros reglamentos, mediante la certificación que exige dicha R. O., expedida por la Sacramental.

Dentro de esta situación, perfectamente legal, con arreglo a lo estatuido en las citadas disposiciones, nuestros Mayordomos y parientes reglamentarios han construído mausoleos y muchos de ellos han adquirido, sabe Dios con cuanto sacrificio de intereses por su modesta posición social, sepulturas para su enterramiento en su día, confiados en el perfecto derecho que para ello le conceden las disposiciones legales antes citadas.

Seguramente no se ha dado cuenta el Sr. Alcocer de la transcendencia y ¿por qué no decirlo? de la improcedencia e injusticia de su petición de clausura de nuestro cementerio, y ello significa, hablando en términos de defensa y salvo el respeto y consideración que nos merece dicho señor, significa, decimos, un desconocimiento de sagrados derechos, reconocidos por la ley, y una anulación de respetabilísimos y sagrados intereses, creados y adquiridos bajo la protección y amparo de la legislación que los autorizaba y les dió vida.

No queremos ocuparnos del gran perjuicio moral que, además del citado, acarrearía la clausura de nuestro cementerio a las personas que tienen allí enterrados a sus padres, cónyuges, hijos, etc., y que esperan con fiadamente el día de unir sus restos a las personas queridas que allí yacen, en cuyo caso se encuentran la totalidad de los que formamos esta Archicofradía. Traba-





jo nos cuesta creer que pueda cometerse tamaña injusticia sin ningún fundamento serio en que basarla.

Pasemos a ocuparnos ahora, siquiera sea someramente, del Convenio de 1907 entre el Ayuntamiento y las cuatro Sacramentales. Venía aquél estableciendo y exigiendo a éstas el pago de ciertos arbitrios por los enterramientos que practicaban; a estas exacciones nos opusimos nosotros, entablando al efecto los recursos legales procedentes, hasta que recayó en uno de ellos la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, de 23 de Noviembre de 1891, en la que se declaró «que el Ayuntamiento no está autorizado para imponer arbitrios a los cementerios de propiedad particular, y no están incluídos ellos ni sus enterramientos en los artículos 136 y 137 de la Ley municipal». Para poner fin a estos pleitos y recursos, que se continuaron hasta el año 1906, a pesar de lo establecido en la precitada Sentencia, se redactó el referido Convenio, en cuya virtud el Ayuntamiento daría a las Sacramentales las licencias municipales que hubieran menester para la construcción de las localidades de enterramiento que necesitasen para la inhumación de los cadáveres que tenían ese derecho, a cambio de una cantidad proporcional a la clase de enterramiento, estableciendo al efecto una escala que fluctuaba entre la cantidad de 33 pesetas por un hueco de sepultura de patio, hasta la de 165 pesetas por una inhumación en mausoleo. Aunque se fija la duración de tres años para el Convenio, se ha venido observando y cumpliendo por ambas partes hasta la fecha presente, constituyendo un verdadero contrato o compromiso, con arreglo al cual el Ayuntamiento nos ha



concedido las licencias oportunas para construir las localidades de enterramiento que necesitábamos para que los Mayordomos de esta Sacramental y sus familias que tienen derecho reconocido por las vigentes disposiciones legales y por el propio Ayuntamiento, en el mero hecho de conceder esos licencias.

Y ahora viene lo verdaderamente incomprensible y que pudiéramos calificar de inaudito, y es que el Ayuntamiento, haciendo caso omiso de lo consignado en el Convenio y prescindiendo de las licencias que él mismo nos ha dado a nosotros como Corporación, y a muchos de nuestros Mayordomos en particular para la construcción de sus mausoleos, pide la clausura de nuestro cementerio, ante el hecho que en realidad no debe afectarnos, de haberse construído la nueva Necrópolis.

Basta con la simple exposición de estos hechos para que vea claramente V. I. la razón poderosa que nos asiste por todos conceptos para oponernos a la referida petición de la Alcaldía, que con ella infringe hasta los preceptos del Código civil, que en su art. 1.091 establece que «las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de las mismas».

Hacemos caso omiso de otras consideraciones que al ilustrado criterio de V. I. no se ocultarán, para no hacer demasiado extenso este escrito; pero antes de terminar, vamos a consignar un hecho que merece ser conocido por su importancia.

El 24 de Noviembre de 1909 se recibió en esta Sacramental un oficio del Sr. Subdelegado de Medicina y Sanidad, en el que se nos comunicaba que, en virtud



de una denuncia presentada en la Inspección provincial de Sanidad sobre supuestas faltas de licencias de la Junta municipal de Sanidad para la ampliación de nuestro cementerio, exigía la presentación de los referidos documentos. Personado dicho Sr. Subdelegado en nuestras Oficinas, examinó las licencias municipales que habíamos obtenido para la construcción de sepulturas y nichos que entonces se estaban efectuando en el cementerio de San Isidro, quedando satisfecho y convencido del derecho que nos asistía y de la corrección de nuestra conducta, y nos anunció su próxima visita al cementerio de San Isidro, para comprobar sobre el terreno la exactitud de la tal denuncia, sobre ciertos extremos referentes al modo de hacer las inhumaciones. Como resultado de todo ello, el mencionado Sr. Subdelegado de Medicina y Sanidad, nos trasladó un oficio, que tenemos a la disposición de V. I., en el que nos manifiesta que con fecha 14 del presente mes (Diciembre de 1909), dice a la Inspección provincial de Sanidad lo siguiente, que no copiamos por su extensión, pero que se refiere, en primer término, a la afirmación de que tenemos las licencias necesarias para la construcción de esas localidades, y añade textualmente: «Además, he visitado el cementerio de que se trata (el de San Isidro), y especialmente el patio objeto de la denuncia (el del Sacramento), y los he hallado *en excelentes condiciones higiénicas y apropiadas*, tanto en lo que se refiere a la naturaleza del terreno, cuanto por lo que respecta a la construcción de las localidades de enterramiento, que están hechas con todos los requisitos legales en todos los patios de que se compone el Ce-



»menterio», y más adelante añade: «El Subdelegado  
»que suscribe, en virtud de lo prevenido en los artícu-  
»los 54 y 133 de la Instrucción general de Sanidad pú-  
»blica vigente, estima *que la expresada Sacramental de*  
»*San Isidro cumple en todas sus partes con lo dispuesto*  
»*en las leyes de Sanidad, etc.*»

Después de estas rotundas afirmaciones hechas por tan respetable funcionario público, que corrobora y confirma cuanto al principio de este escrito dejamos consignado respecto a las condiciones de higiene y salubridad del cementerio de San Isidro, creemos innecesario hacer otros comentarios y entendemos que basta con lo expuesto para demostrar la razón que nos asiste y nuestro indiscutible derecho para que continúe abierto el cementerio de San Isidro hasta el cumplimiento de su misión respecto de los Mayordomos y sus parientes que tienen derecho a ser inhumados en el mismo, de conformidad con la legislación vigente.

Por lo tanto:

Suplico a V. I. que teniendo por evacuada la vista que se nos ha dado del expediente de referencia, se sirva desestimar la instancia de la Alcaldía de Madrid, en la que se solicita la clausura del cementerio de San Isidro y declarar que procede continúe abierto y prestando el servicio a que está afecto respecto a nuestros Mayordomos y sus familias, por encontrarse dentro de las prescripciones legales.—Es justicia que espero merecer de V. I., cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid,      de Diciembre de 1924.







1.500 Ptas  
96

Pf: 168